EXPEDIENTE: SUP-REP-269/2025

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, a *** de agosto de dos mil veinticinco.

Sentencia que, ante la impugnación interpuesta por **Martha Marín García**², **revo**ca para efectos el acuerdo dictado por la **Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral**³, ya que varió la materia de la queja.

ÍNDICE

GLOSARIO.....	1
I. ANTECEDENTES	2
II. COMPETENCIA	2
III. PROCEDENCIA	3
IV. MATERIA DE LA CONTROVERSIA	3
V. ESTUDIO DE FONDO	5
VI. RESOLUTIVO	8

GLOSARIO

Actora o recurrente:	Martha Marín García (magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit).
Denunciada:	Candelaria Rentería González (magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit).
Autoridad responsable/UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INE:	Instituto Nacional Electoral.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
PES:	Procedimiento Especial Sancionador.
REP:	Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
VPG:	Violencia política en razón de género.

¹ **Secretario instructor:** Fernando Ramírez Barrios. Secretarías: Nancy Correa Alfaro y Jaquelin Veneroso Segura.

² Magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.

³ UT/SCG/PEVPG/MMG/JL/NAY/13/2025.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El once de agosto de este año,⁴ la recurrente presentó denuncia contra Candelaria Rentería González, en su carácter de magistrada presidenta por la presunta comisión de hechos constitutivos de violencia política.

2. Acuerdo impugnado⁵. El catorce de agosto, la autoridad responsable determinó desechar la queja, porque del análisis preliminar de los hechos denunciados no constituyen una falta o violación en materia electoral en materia de VPG.

3. REP. El diecinueve de agosto, la parte recurrente impugnó la determinación anterior, ante la autoridad responsable, remitiéndola a esta Sala Superior al día siguiente.

4. Turno. Recibidas las constancias la magistrada presidenta acordó integrar el expediente **SUP-REP-269/2025** y turnarlo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

5. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó y admitió el recurso a trámite y cerró la instrucción.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque se cuestiona un acuerdo que desechó la queja interpuesta por la recurrente, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala Superior.⁶

⁴ En adelante las fechas se refieren al presente año.

⁵ UT/SCG/PEVPG/MMG/JL/NAY/13/2025.

⁶ Con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución; 253 fracción IV, inciso g), y 256, fracción XVI, de la Ley Orgánica, así como 109 de la Ley de Medios.

III. PROCEDENCIA

Se cumplen los siguientes requisitos de procedencia.⁷

1. Forma. La demanda se interpuso por escrito y consta: **a)** el nombre y firma de la recurrente; **b)** correo electrónico para oír y recibir notificaciones; **c)** identificación del acto impugnado; **d)** los hechos que sustentan la impugnación; y **e)** los agravios y preceptos jurídicos presuntamente violados.

2. Oportunidad. El acuerdo impugnado fue notificado a la recurrente el quince de agosto⁸ y el recurso se interpuso en fecha diecinueve siguiente ante la oficialía de partes común del INE, por tanto, es evidente que se promovió dentro del plazo legal de cuatro días hábiles para su impugnación⁹.

3. Legitimación y definitividad. Se satisfacen, pues la recurrente es parte denunciante en el PES del cual derivó el acuerdo impugnado y comparece por su propio derecho, además de que no hay otro medio de impugnación que deba agotarse previamente.

IV. MATERIA DE LA CONTROVERSIA

La recurrente denunció a la magistrada presidenta del Tribunal local por violencia política, a partir de los siguientes hechos:

- Restricción en el uso de la voz y opacidad de las sesiones. El 30 de junio de 2025 se le negó el uso de la voz en sesión privada. A partir de dicha fecha, las sesiones administrativas dejaron de ser públicas y pasaron a celebrarse de manera privada, lo que transgrede el principio de máxima publicidad.

⁷ Artículos 7, numeral 2; 8, numeral 1; 9, numeral 1; 13, numeral 1, inciso b); 109, numeral 1, inciso b), así como 110, todos de la Ley de Medios.

⁸ Conforme a las constancias que se encuentran en el expediente electrónico "SUP-REP-269-2025" remitido por la autoridad responsable.

⁹ Al respecto, véase la jurisprudencia 11/2016 de esta Sala Superior, de rubro "**RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LOS ACUERDOS DE DESECHAMIENTO O INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA, ES DE CUATRO DÍAS**".

SUP-REP-269/2025

- Ese mismo día solicitó el enlace de la sesión privada y se le entregó bajo el esquema de información reservada, lo que le genera temor respecto a las posibles consecuencias de dar a conocer a las autoridades las conductas de violencia ejercidas en su contra.
- En la sesión privada de 31 de julio, no se le permitió formular una pregunta a la magistrada presidenta, para aclarar dudas sobre un acuerdo a votarse. Asimismo, se le negó ejercer su voto, por no haber aprobado el orden del día.
- El Pleno acordó remover a un actuario con motivo de que en la entrega-recepción de la presidencia no se localizó documentación que acreditara el cumplimiento de requisitos para el cargo, a pesar de que ella sí informó a las magistraturas sobre el examen presentado por dicho servidor público y éstas asistieron a la sesión en la que se le nombró. No se circularon los documentos que justificaran la remoción, lo que le impidió emitir un voto informado. Tampoco se atendió su petición de que en el acuerdo de remoción se consignara la razón por la que se le negó el derecho a votar.
- En la sesión privada de 5 de agosto se volvió a omitir la documentación necesaria para votar respecto al nombramiento de diversos cargos. Aunque en esa ocasión sí se le permitió votar, a pesar de haber rechazado el orden del día.
- Señala la existencia de un trato desigual en su contra durante las sesiones, en comparación con la otra magistrada, a quien no se le exige solicitar previamente el uso de la voz ni se le niega el mismo.

Solicitó medidas cautelares para detener las conductas y se requiera a la presidenta del Tribunal local la convoque a las sesiones con las debidas formalidades y se le dé la oportunidad de participar.

2. ¿Qué determinó la UTCE?

Desechó la queja porque de un análisis preliminar consideró que los hechos denunciados no constituían VPG.

Señaló que la denunciante relató que partir de la designación de la magistrada presidenta se le ha negado el uso de la voz, la formulación de peticiones y, en algunos casos, la emisión de su voto en sesiones del Pleno, que se clasificaron como privadas las sesiones administrativas y que en diversas reuniones no se le proporcionó documentación necesaria.

No obstante, determinó que del análisis preliminar de los hechos no advertía elementos con los que pueda inferirse siquiera indiciariamente la comisión de una posible infracción constitutiva de VPG, ya que las conductas se vinculaban con diferencias de criterio en la conducción de sesiones, la interpretación de reglas internas sobre el uso de la voz, la inclusión de documentos y el desarrollo de votaciones, lo cual forma parte de la dinámica institucional y funcional, pero sin que de los hechos advirtiera VPG.

Lo anterior al no desprender expresiones, alusiones o tratos que hagan referencia a la condición de mujer de la denunciante, ni que las decisiones adoptadas se hubieran motivado en estereotipos o prejuicios de género, sino eran cuestiones administrativas y de gobernanza interna.

Tampoco advirtió un impacto diferenciado en el ejercicio de los derechos político-electorales porque señaló que aunque las diferencias pudieran generar un ambiente de tensión laboral o institucional, no actualizaba por sí mismo la VPG.

3. ¿Qué plantea la recurrente?

Plantea que su denuncia fue por violencia política y no por VPG, lo cual también puede sustanciarse en la vía especial sancionadora, por lo que incurrió en falta de congruencia externa entre lo denunciado y lo resuelto.

Ejemplifica que algo similar se presentó ante la Sala Regional Guadalajara que, en el SG-JDC-093/2022, revocó la sentencia de un tribunal local para que emitiera otra en la que sancionara las conductas por violencia política y no por VPG, al igual que en el ST-JG-0045/2025.

V. ESTUDIO DE FONDO

1. Decisión

Es **fundado** el agravio relativo a que la responsable varió la materia de la queja, faltando al principio de congruencia, ya que se limitó a examinar

si los hechos denunciados configuraban de manera preliminar VPG, cuando la actora denunció violencia política.

2. Justificación

Debida fundamentación y motivación

Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, a fin de brindar seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos.

Con ello se busca que toda autoridad refiera de manera clara y detallada las razones de hecho y de Derecho que está tomando en consideración para apoyar sus determinaciones, a fin de evitar que se adopten decisiones arbitrarias.

De modo que, la fundamentación y motivación son parte del debido proceso y son parte de los requisitos que deben cumplir las autoridades para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de autoridad que pueda afectarlos.

Principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias

El principio de exhaustividad impone a las personas juzgadoras, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.¹⁰

El principio de exhaustividad se cumple cuando en la resolución se agota cuidadosamente el estudio de todos los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza

¹⁰ Tesis de jurisprudencia 43/2002, de rubro: **PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.** Así como la tesis XXVI/99. **EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES.**

jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a las y los gobernados en aras del principio de seguridad jurídica.

La congruencia externa, como principio rector de toda resolución, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Asimismo, esta Sala Superior ha considerado que si un órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.

3. Caso concreto

Es **fundado** el agravio respecto a la falta de congruencia, pues como se expuso las autoridades no pueden resolver algo distinto a lo planteado, en este caso, en la queja.

En el caso concreto, la UTCE debió emitir un pronunciamiento respecto de la infracción denunciada, atendiendo a los hechos planteados por la promovente.

Así, tal como lo sostiene la recurrente, la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre conductas que podrían constituir violencia política, independientemente de que se hubieran configurado o no por razón de género.

Entonces, al emitir el acuerdo de desechamiento controvertido, la UTCE concluyó que de un análisis preliminar era inexistente la VPG, cuando la pretensión es si puede configurarse violencia política.

Por lo que, atendiendo a la pretensión de la actora, la autoridad responsable estaba obligada a analizar los hechos denunciados en esa dimensión: como posibles actos de violencia política.

Sin embargo, la responsable dejó de atender a la intención de la denunciante que era valorar los hechos en un sentido más amplio.

Por ello, le asiste la razón a la recurrente al señalar la falta de congruencia en el acuerdo impugnado, pues la UTCE en lugar de pronunciarse sobre la posible configuración de violencia política conforme a lo solicitado, restringió su análisis únicamente a la VPG.

Esa variación llevó a un pronunciamiento que no se encuentra ajustado a derecho, sobre todo considerando que esta Sala Superior ha reconocido la diferencia entre la infracción consistente en violencia política y aquella configurada por razón de género, de modo que el análisis de la autoridad debió atender a esa distinción.¹¹

Entonces, al resultar fundado el agravio, lo procedente es **revocar el acuerdo** impugnado para que la UTCE determine lo que conforme a Derecho corresponda respecto a posibles hechos de violencia política y se **pronuncie** respecto a las medidas solicitadas.

Por lo expuesto y fundado, se:

VI. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se **revoca** el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en la ejecutoria.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

¹¹ Véase SUP-REC-61/2020.

Así, por ***** de votos, lo resolvieron la magistrada y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

NOTA PARA EL LECTOR

El presente proyecto de sentencia se publica a solicitud del magistrado ponente, en términos del Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos para la publicación de los proyectos de resolución por parte de los integrantes del Pleno de las Salas de este Tribunal Electoral.

Este proyecto se circula para efectos de trabajo y discusión entre las ponencias. Su contenido no es obligatorio para ninguna de las magistradas ni magistrados de este TEPJF, incluyendo al Ponente. **Por tanto, es totalmente modificable.** * Consultar la nota para el lector adjunta a este proyecto.